

NOTIFICACIONES

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
AL LICENCIADO JUAN JOSÉ CASTRO GALDÁMEZ, APODERADO DE JUAN ROSA
QUINTANILA QUINTANILLA

HAGO SABER: que en el procedimiento administrativo de denuncia NUE 2-DDP-2020 (GG), el Instituto de Acceso a la Información Pública, con fecha 19 de octubre de 2020, ha pronunciado la resolución que literalmente DICE:



NUE 2-DDP-2020 (GG)

[REDACTED] contra Quintanilla

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las trece horas con cuarenta y tres minutos del diecinueve de octubre de dos mil veinte.

Descripción del caso:

I. El presente procedimiento sancionador fue promovido por [REDACTED] en contra de la actuación del servidor público **Juan Rosa Quintanilla Quintanilla**, Vicerrector Administrativo de la Universidad de El Salvador (UES) por la supuesta comisión de la infracción clasificada como muy grave contenida en el artículo 76 letra “b” de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), consistente en: “entregar o difundir información reservada o confidencial”.

El denunciante, manifestó que el 4 de febrero de este año, un custodio en la entrada principal de la UES detuvo a su compañera de vida para informarle que el denunciante tenía prohibida la entrada al campus; además, que al costado de la caseta y a la vista de todo el público, se encontraba divulgado su nombre y número de Documento Único de Identidad (DUI) en una nota firmada y sellada por **Juan Rosa Quintanilla Quintanilla**, Vicerrector Administrativo de la UES a través de la cual, se justificaba la prohibición de su ingreso, esta además, con copia al Consejo Superior Universitario (CSU), Asamblea General Universitaria (AGU), Decanas y

Decanos de las Facultades de la UES; asimismo, agregó que en la nota expuesta también se había divulgado el nombre de [REDACTED].

A su escrito de denuncia anexo los documentos siguientes: copia de su DUI, copia de la nota presuntamente pegada en cada uno de las casetas de acceso a la UES, copia de su comprobante de estudiante activo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UES y copia de pagos en la UES correspondientes a este año.

II. Este Instituto admitió la denuncia por el supuesto cometimiento de la infracción antes mencionada, y designó al comisionado José Alirio Cornejo Najarro para instruir el procedimiento; sin embargo, el caso fue reasignado al comisionado Gerardo José Guerrero Larín, para continuar con su instrucción y emitir un proyecto de resolución.

III. En plena observancia y respeto al derecho de defensa que debe imperar en todo procedimiento, de conformidad con el artículo 88 de la LAIP, se corrió traslado al denunciado **Juan Rosa Quintanilla Quintanilla**, Vicerrector Administrativo de la UES, para que rindiera su informe de defensa.

En su informe de defensa **Quintanilla** manifestó no haber incurrido en la comisión de la infracción que se le atribuye y sobre los hechos denunciados en lo medular señaló: *i)* que el 30 de enero de este año, se apersonó a su oficina un custodio de la UES, para informarle de un incidente con unas personas que habían ingresado al campus en estado de ebriedad y que se encontraban ubicadas en un lugar próximo a la oficina de mantenimiento de la UES; sin embargo, al presentarse al lugar señalado para constatar los hechos ya se habían retirado; *ii)* que el 31 de enero de este año, recibió a las 1:04 p.m., un informe suscrito por [REDACTED], supervisor de seguridad institucional, en donde, le comunicó que el 30 de enero de este año, dio aviso al encargado del parqueo de las oficinas centrales, sobre la presencia de unos sujetos sospechosos en las instalaciones de la UES que deseaban parquearse en el lugar asignado a los trabajadores de las oficinas centrales; por lo que, alertó a los compañeros de seguridad, quienes llegaron al lugar, donde, se encontraban los referidos sujetos y verificaron el estado de ebriedad en el que se encontraban, estos fueron identificados a través de sus carnet de estudiantes y DUI, como: [REDACTED], [REDACTED], Estudiante de la Licenciatura de Historia y [REDACTED] propietario de un vehículo placas: [REDACTED] color rojo, marca Nissan; asimismo, informaron que al lugar se había hecho presente la Policía Nacional Civil (PNC); *iii)* ante ello, previo a decidir

las medidas preventivas o sancionadoras a tomar, indagó sobre los hechos relacionados, encontrándose con diversas versiones que aseguraban que las personas señaladas en el informe también estaban vinculadas con un incidente que salió en una publicación de la Prensa Gráfica el 31 de enero de este año.

Aclarado el aspecto fáctico, agregó que la UES cuenta con el Reglamento General de Ordenamiento para el Control del Ingreso Peatonal y Vehicular a la UES, en donde, se regulan normas de tránsito e infracciones a las mismas, siendo una infracción la siguiente: d: “*manejar en estado de embriaguez o bajo efectos estupefacientes*”; la competencia para la aplicación de las sanciones por la comisión de las infracciones ahí reguladas corresponde al Vicerrector Administrativo, calidad que el denunciado ostenta; sin embargo, si la infracción cometida también se encuentra tipificada en el Reglamento Disciplinario de la UES, se debe informar a la autoridad competente para que valore si procede o no la apertura del instructivo administrativo disciplinario correspondiente; en ese sentido, de conformidad al artículo 12 del Reglamento Disciplinario de la UES (RDUES), es infracción menos grave: “e) consumir o encontrarse evidentemente bajo los efectos de bebidas alcohólicas o encontrarse bajo el efecto de drogas legalmente prohibidas, durante la jornada laboral o en el desarrollo de actividades académicas según el caso”, la aplicación de las infracciones tipificadas en el RDUES se distribuye de la forma siguiente: a) en caso de ser estudiante a la Junta Directiva de la Facultad a la que pertenece; b) si es trabajador por Ley de Salarios al Decano o Decana o al Rector según el caso; y, c) si es docente a la Junta Directiva.

En vista de lo anterior -continuó manifestando-, procedió a verificar si los estudiantes involucrados en el hecho, eran estudiantes activos o empleados que laboraban en la Universidad a efecto de informar a las autoridades relacionadas en el párrafo que antecede, producto de ello, recibió nota suscrita por el Ingeniero Carlos Ernesto Vargas Ramos, secretario de asuntos académicos, a través de la cual se le informó que ambos eran estudiantes inactivos; en el mismo sentido, se le remitió nota por el Licenciado Benjamín Humberto Pérez Pineda, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la UES comunicándole que no se había encontrado registro de las personas en referencia como trabajadores de la Universidad. Ante tales circunstancias, con base las facultades que le otorga el Reglamento General para Ingreso y Ordenamiento vehicular de la UES, emitió nota con referencia VRAD 164-2020/2019-2023, de fecha 3 de febrero de este año, dirigida al personal de seguridad institucional, para que, de forma preventiva, no se le permitiera

el ingreso al campus a [REDACTED] y [REDACTED] propietario de un vehículo placas: [REDACTED], color rojo, marca Nissan. En ese orden, expuso puede constatare que en ningún momento ordenó o instruyó realizar la colocación de la nota en las casetas ubicadas en la entrada de la UES como lo mencionó el denunciante y tampoco las colocó de ser ese el caso.

En relación a la remisión de la nota a la Asamblea General Universitaria (AGU), Consejo Superior Universitario (CSU), Decanas y Decanos, indicó que cada órgano de gobierno tiene funciones relacionadas con el tema de seguridad de los miembros de la comunidad universitaria, en el caso de la AGU y el CSU -de los cuales forman parte los Decanos y Decanas-, el artículo 23 del Reglamento General para el Ingreso y Ordenamiento Vehicular, dispone que todo lo no previsto en dicha norma será resuelto por el CSU; de modo que, la información fue remitida en el marco de lo dispuesto en el artículo 26 de la LAIP.

Por otro lado, en cuanto a los datos consignados en la nota expresó que si bien, el número de DUI, es información confidencial, el derecho a la protección de datos personales no es absoluto, pues existen disposiciones legales que regulan circunstancias en las cuales se podrá proporcionar datos personales sin el consentimiento de su titular, algunos supuestos son: cuando fuere necesario por razones estadísticas, científicas o de interés general siempre que no se identifique a la persona que se refieren, cuando se transmitan entre obligados, siempre y cuando se destinen al ejercicio de sus facultades, cuando se trate de investigación de delitos e infracciones administrativas o, cuando se contraten o recurran a terceros para la prestación de un servicio que demande el tratamiento de datos personales. Partiendo de tales excepciones, de las atribuciones y deberes de contenido legal que le han sido conferidos en el cargo de Vicerrector Administrativo, sostuvo que no ha entregado o divulgado la información del denunciante en medios de comunicación, medios materiales o electrónicos.

A su informe anexó, como medios probatorios relacionados con los hechos objeto de la denuncia ofreció los documentos siguientes: 1) copia certificada de nota con REF VRAD 164-2020/2019-2023, de fecha 3 de febrero de 2020, en donde consta, que en la nota dirigida al personal de seguridad institucional; se solicitaba el cumplimiento de la orden de impedir el ingreso al denunciante; 2) copia certificada de informe de fecha 30 de enero de 2020, recibido en fecha 31 de enero del mismo año, remitido por el señor [REDACTED] en su calidad de supervisor, en donde consta que el día 30 de enero de 2020, los señores [REDACTED] y [REDACTED]

[REDACTED], fueron identificados a través de sus Documentos Únicos de Identidad y se encontraban en evidente estado de ebriedad lo cual es una infracción disciplinaria; 3) copia simple de nota periodística de la Prensa Gráfica titulada: “tres ebrios golpean a estudiante de medicina en la UES”, suscrita por la periodista [REDACTED] y [REDACTED] de fecha 31 de enero de 2020, en la que se refería que los atacantes habían ingresado en estado de ebriedad y en un carro rojo, situación que generó que se profundizará sobre la investigación para determinar si los señores Samuel Vladimir Álvarez Campos y Cristian Antonio Torres V., estuvieron o no vinculados con tal hecho; 4) Copia certificada de nota con REF VRAD 164-A-2020/2019-2023, de fecha 31 de enero de 2020, dirigida al Ing. Carlos Ernesto Vargas Ramos, secretario de asuntos académicos; así como, copia certificada de respuesta de fecha de 3 febrero de 2020, en la que el Ing. Carlos Ernesto Vargas Ramos, secretario de asuntos académicos, responde que los señores [REDACTED] y [REDACTED] a la fecha 3 de febrero eran estudiantes inactivos, el primero desde el ciclo I/2007 y el segundo desde el ciclo II/2017; 5) copia de nota con REF.VRAD 164-B 2020/2019-2023 de fecha 31 de enero de 2020, dirigida al licenciado Benjamín Humberto Pérez Pineda, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, solicitando informe si aparecen en el registro de trabajadores de la UES, los señores [REDACTED] y [REDACTED]; si como, copia certificada de respuesta de fecha 3 de febrero de 2020, en la que el licenciado Benjamín Humberto Pérez Pineda, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos responde que los señores [REDACTED] y Cristian [REDACTED], a la fecha 3 de febrero no aparecían en el registro de trabajadores de la UES; 6) copia simple de requerimiento de información con referencia UAIP/DP 10.1/2020, de fecha de 12 de febrero 2020, realizado por el señor [REDACTED] y dirigido a él su calidad de Vicerrector Administrativo, por parte de la oficial de información de la UES, así como, copia certificada de la respuesta brindada por el Coordinador de la Unidad de Seguridad Institucional, licenciado [REDACTED] en la que consta el nombre de los custodios; 7) copia de nota con REF. VRAD 0284-2020/2019-2023, de fecha 6 de marzo de 2020, en la cual solicitó al Coordinador de la Unidad de Seguridad Institucional, licenciado [REDACTED], que le proporcionará la bitácora correspondiente al 3 de enero de 2020; así como, la copia certificada de nota de fecha 9 de marzo de 2020, en la que el licenciado [REDACTED], entrega la bitácora solicitada donde consta algunos detalles, de los hechos ocurridos el 30 de enero de 2020, en relación a los señores [REDACTED] y [REDACTED], copia simple de la bitácora donde consta el informe de fecha 30 de enero de 2020.

Unido a ello, solicitó que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 de la LAIP, que este Instituto requiera para mejor proveer a la secretaría de asuntos académicos la información confidencial relativa a la fecha en que el señor [REDACTED] realizó el trámite de activación; lo cual, tuvo como motivación cambiar su condición de estudiante inactivo a estudiante activo para fundamentar su interés legítimo de ingresar al campus central, pero al momento de requerirse el informe correspondiente y emitir circular era estudiante inactivo desde hace tres años, tal y como consta en el informe adjunto emitido por el secretario de asuntos académicos.

Por otro lado, como elementos para probar cómo se conforma la Comisión de Seguridad y que miembros de la Asamblea General Universitaria (AGU) y el Consejo Superior Universitario (CSU) son parte de la misma, adjuntó documentación consistente en: 1) copia certificada de nota con REF. VRAD 0047/2015-2019 de fecha 20 de noviembre de 2019, dirigida al CSU, en donde, de conformidad al artículo 13 del Reglamento General de Servicio de Seguridad Institucional de la UES, esta se conforma por el Vicerrector Administrativo, el Director de la USI, dos Decanos designados por el CSU, el Fiscal General de la Universidad y un representante estudiantil designado por la AGU y el CSU, solicitando el nombramiento del CSU; 2) copia del Acuerdo del CSU, No. 004-2019-2021-2º parte (IV-5.4), tomado en sesión ordinaria el 28 de noviembre de 2019, en la que se nombran dos Decanos y el representante estudiantil que conforma en representación del CSU la Comisión de Seguridad; y 3) Convocatoria No. 0010-2019/2019-2023 de fecha 3 de diciembre de 2019 de la Comisión de Seguridad, donde constan todos sus integrantes y cargos.

Finalmente, como elementos probatorios para determinar las diversas medidas de seguridad adoptadas por su persona como Vicerrector Administrativo, incorporó los documentos siguientes: 1) copia certificada de nota con REF.VRAD 01101-2020/2019-2023 de fecha 13 de febrero de 2020, dirigida al Lic. Ángel Benjamín Cestoni en su calidad de Director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, solicitando audiencia; 2) copia certificada de nota con REF.VRAD 0251 -2020/2019-2023 de fecha 3 de marzo de 2020, dirigida al Comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas en su calidad de Director General de la Policía Nacional Civil, solicitando audiencia; 3) copia certificada de nota con REF.VRAD 0252 -2020/2019-2023 de fecha 3 de marzo de 2020, dirigida al Sub Comisionado [REDACTED] en su calidad de Jefe de la Delegación de San Salvador de la Policía Nacional Civil, solicitando audiencia; 4) copia

certificada de nota con REF. VRAD 0249/2019-2023, de fecha 6 de marzo en la que se requiere a los Decanos y Decanas incorporar en el plan de compras e iniciar los trámites para la adquisición de uniformes, armas, porta equipo y radios portátiles para el personal de seguridad bajo su jurisdicción, con lo que se pretende probar otra de las medidas adoptadas en el ejercicio de su competencia como Vicerrector Administrativo y además, que hay personal de seguridad bajo la jurisdicción de los Decanos; 5) copia simple del Perfil del Proyecto de Fortalecimiento de la Video Vigilancia en la Universidad de El Salvador, de noviembre de 2019; 6) copia certificada de Memorándum No. 002-2020/2019-2023 de fecha 21 de enero de 2020, en la que se estipulan otras medidas de seguridad a adoptar como la portación obligatoria del carnet; 7) copia certificada de nota con REF. CESSO 0162/2020, de fecha 7 de febrero de 2020, en la cual solicitó a las Decanas de la Facultad de Medicina y Facultad de Química y Farmacia, así como al Decano de la Facultad de Odontología, su apoyo en el sentido de restringir las ventas no autorizadas del del recinto universitario en la respectiva Facultad; y 8) Copia certificada de nota con REF.VRAD 0264 - 2020/2019-2023 de fecha 06 de marzo de 2020, dirigida al [REDACTED] en su calidad de Coordinador de la Unidad de Seguridad Institucional, en la que le instruyo a informar a los estudiantes con ventas dentro del campus universitario, se les refiera el Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 009-2019-2021 (VIII-18.2), tomado en sesión ordinaria del día 06 de febrero de 2020, previamente citado, el cual manifiesta la no autorización de ventas.

En relación, a los documentos aportados por las partes como medios probatorios, se tuvieron por ofrecidos y se determinó que su admisión se decidiría por el Pleno de este Instituto, en la audiencia oral de este procedimiento, en donde las partes debían exponer nuevamente su pertinencia y utilidad, conforme a los principios economía e inmediación establecidas en los artículos 10 y 11 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM).

IV. La audiencia oral, se desarrolló a través de la plataforma de “google meet”, en aplicación de lo establecido en los artículos 3 letra “g” de la LAIP y 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA). En este acto, comparecieron el denunciante [REDACTED], [REDACTED] y su apoderado el licenciado Juan José Castro Galdámez, calidad acreditada en etapas anteriores del procedimiento.

En etapa probatoria, [REDACTED] ratificó los medios probatorios siguientes: 1) copia de comprobante a su nombre, de estudiante activo en la facultad de Ciencias

y Humanidades de la Universidad de El Salvador y copia de boleta de pago a su nombre, en la Universidad, 2) copia de solicitud de acceso a la información personal presentada ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de Universidad de El Salvador (UES), el veinticinco de febrero de este año, por medio de la cual requirió acceso a: se le informe si se había dado apertura procedimiento sancionatorios o si existen denuncias en su contra; 3) copia de solicitud de acceso a la información personal presentada ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de Universidad de El Salvador (UES), el diecinueve de febrero de dos mil veinte, a través de la cual, requirió: acceso al informe presentado el treinta de enero de este año. -ambos documentos con la información entregada por parte de la oficial de información de la Universidad de El Salvador, para dar respuesta a sus solicitudes; y 4) calendarización de actividades académicas”. Sobre la pertinencia y utilidad de dichos documentos manifestó que con tales se pretendía probar su estado como estudiante activo en la UES, procedimiento que finalizó el 6 de noviembre de 2019 para poder inscribirse en el ciclo 0I/2020, por lo que, a la fecha en la que sucedieron los era estudiante activo; asimismo, que no existían procedimientos administrativos abiertos en su contra para justificar su no ingreso a las instalaciones de la UES.

De dicho ofrecimiento se corrió traslado al denunciado a través de su apoderado quien se opuso a su admisión por considerar que tales documentos carecían de pertinencia y utilidad; así, respecto de la calendarización de actividades académicas, señaló que se trataba de un documento que no tenía relación con los hechos denunciados, y sobre el comprobante de activación de su estado de estudiante, señaló que no contribuye a dilucidar los hechos denunciados.

Expuesto ello, el apoderado del denunciado ratificó los medios probatorios ofertadas en su informe de defensa, manifestando la pertinencia y utilidad de cada uno de ellos en el orden siguiente: 1) copia certificada de nota con REF VRAD 164-2020/2019-2023, de fecha 3 de febrero de 2020, en donde consta, que en la nota dirigida al personal de seguridad institucional; se solicitaba el cumplimiento de la orden de impedir el ingreso al denunciante. En el documento se evidencia que fue emitido con base a las facultades otorgadas al Vicerrector Administrativo de la UES, en el artículo 4 del Reglamento de Ingreso Vehicular y Control Peatonal de dicho ente; además, que no se ordenó su divulgación a través de algún mecanismo como su colocación en las entradas de la UES; 2) copia certificada de informe de fecha 30 de enero de 2020, recibido en fecha 31 de enero del mismo año, remitido por el señor José David García en su calidad de supervisor, con el cual se comprueba que día 30 de enero de 2020, los señores [REDACTED] y [REDACTED], fueron identificados a través de sus documentos

únicos de identidad y se encontraban en evidente estado de ebriedad lo cual es una infracción disciplinaria: 3) Copia simple de nota periodística del “Diario de Hoy” titulada: “tres ebrios golpean a estudiante de medicina en la UES”, suscrita por la periodista [REDACTED] y [REDACTED] de fecha 31 de enero de 2020, en la que se refería que los atacantes habían ingresado en estado de ebriedad en un carro rojo, situación que generó que se profundizará sobre la investigación para determinar si los señores [REDACTED] y [REDACTED], estuvieron o no vinculados con tal hecho y se tomarán medidas preventivas, para evitar riesgos a los miembros de la comunidad universitaria, como fue prohibir el ingreso a las personas que los informes demostraron que no tenía vínculo académico con la institución. Esta, con la finalidad de acreditar que dentro de la UES existen hechos que atentan contra la seguridad de los miembros de la comunidad universitaria, situaciones que obligan a actuar al denunciado en su calidad de Vicerrector Administrativo de la UES conforme a lo establecido en el Reglamento General para el Ingreso Vehicular y Control Peatonal en la Universidad; 4) copia simple de requerimiento de información con referencia UAIP/DP 10.1/2020, de fecha de 12 de febrero 2020, de datos personales del señor [REDACTED], dirigido al él en su calidad de Vicerrector Administrativo de la UES, por parte de la Oficial de Información de la UES; así como, copia certificada de la respuesta brindada por el Coordinador de la Unidad de Seguridad Institucional, licenciado [REDACTED] en la que consta el nombre de los custodios que estuvieron el día que ocurrieron los hechos objeto de la denuncia. Dicho documento, para establecer que el denunciante conocía las responsabilidades que conllevaba la comisión de los hechos investigados; 5) copia de nota con REF. VRAD 0284-2020/2019-2023, de fecha 6 de marzo de 2020, en la cual solicitó al Coordinador de la Unidad de Seguridad Institucional, licenciado [REDACTED], que me proporcione la bitácora correspondiente al 3 de enero de 2020 y copia certificada de nota de fecha 9 de marzo de 2020, en la que el licenciado [REDACTED], entrega la bitácora solicitada donde consta algunos detalles, de los hechos ocurridos el 30 de enero de 2020, en relación a los señores [REDACTED] y [REDACTED], así como, copia simple de la bitácora donde consta el informe de fecha 30 de enero de 2020. La finalidad de este documento es acreditar que el día 30 de enero de este año, se encontró al denunciante en presunto estado de ebriedad en las instalaciones de la UES, lo cual, obligaba al denunciado como Vicerrector Administrativo de la UES a tomar las medidas legales y reglamentarias al interior de la UES; 6) copia certificada de nota con REF VRAD 164-A-2020/2019-2023, de fecha 31 de enero de 2020, dirigida al Ing. Carlos Ernesto Vargas Ramos secretario de asuntos académicos de la UES; así como, copia

certificada de nota de fecha de 3 febrero de 2020, en la que el Ing. Carlos Ernesto Vargas Ramos, secretario de asuntos académicos, responde a los señores [REDACTED] y [REDACTED], a la fecha 3 de febrero eran estudiantes inactivos, el primero desde el ciclo I/2007 y el segundo desde el ciclo II/2017; 7) copia certificada de nota con REF.VRAD 164-B 2020/2019-2023 de fecha 31 de enero de 2020, dirigida al licenciado Benjamín Humberto Pérez Pineda, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, solicitando informe si aparecen en el registro de trabajadores de la UES, los señores [REDACTED] y [REDACTED]; y copia certificada de nota de fecha 3 de febrero de 2020, en la que el licenciado Benjamín Humberto Pérez Pineda, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos responde que los señores [REDACTED] y [REDACTED] a la fecha 3 de febrero no aparecían en el registro de trabajadores de la UES.

Sobre la pertinencia y utilidad de los documentos descritos en los numerales 6) y 7) que anteceden manifestó que con ellos se pretendía acreditar que el denunciante no tenía vinculación válida con la UES en el momento que ocurrieron los hechos denunciados.

Asimismo, reiteró su petición para que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 de la LAIP, que este Instituto requiera para mejor proveer a la secretaría de asuntos académicos de la UES, información confidencial relativa a la fecha en que el señor [REDACTED] realizó el trámite de activación; lo cual, tuvo como motivación cambiar su condición de estudiante inactivo a estudiante activo para fundamentar su interés legítimo de ingresar al campus central, pero al momento de requerirse el informe correspondiente y emitir circular era estudiante inactivo desde hace tres año, tal y como consta en el informe adjunto emitido por el secretario de asuntos académicos.

En esa línea, continuo manifestando que como elementos para probar cómo se conforma la Comisión de Seguridad y que son parte de la misma, miembros de la Asamblea General Universitaria (AGU) y el Consejo Superior Universitario (CSU), se habían incorporado los documentos siguientes: 1) copia certificada de nota con REF. VRAD 0047/2015-2019 de fecha 20 de noviembre de 2019, dirigida al CSU, en donde, de conformidad al artículo 13 del Reglamento General de Servicio de Seguridad Institucional de la UES, esta se conforma por el Vicerrector Administrativo, el Director de la USI, dos Decanos designados por el CSU, el Fiscal General de la Universidad y un representante estudiantil designado por la AGU y el CSU, solicitando el nombramiento del CSU; 2) copia del Acuerdo del CSU, No. 004-2019-2021-2º parte

(IV-5.4), tomado en sesión ordinaria el 28 de noviembre de 2019, en la que se nombran dos Decanos y el representante estudiantil que conforma en representación del CSU la Comisión de Seguridad; y 3) Convocatoria No. 0010-2019/2019-2023 de fecha 3 de diciembre de 2019 de la Comisión de Seguridad, donde constan todos sus integrantes y cargos;

En ese mismo sentido, indicó como elementos probatorios para determinar las diversas medidas de seguridad adoptadas por su persona como Vicerrector Administrativo, los documentos siguientes: 1) copia certificada de nota con REF.VRAD 01101-2020/2019-2023 de fecha 13 de febrero de 2020, dirigida al [REDACTED] en su calidad de Director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, solicitando audiencia; 2) copia certificada de nota con REF.VRAD 0251 -2020/2019-2023 de fecha 3 de marzo de 2020, dirigida al Comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas en su calidad de Director General de la Policía Nacional Civil, solicitando audiencia; 3) copia certificada de nota con REF.VRAD 0252 -2020/2019-2023 de fecha 3 de marzo de 2020, dirigida al Sub Comisionado [REDACTED] en su calidad de Jefe de la Delegación de San Salvador de la Policía Nacional Civil, solicitando audiencia; 4) copia certificada de nota con REF. VRAD 0249/2019-2023, de fecha 6 de marzo en la que se requiere a los Decanos y Decanas incorporar en el plan de compras e iniciar los trámites para la adquisición de uniformes, armas, porta equipo y radios portátiles para el personal de seguridad bajo su jurisdicción, con lo que se pretende probar otra de las medidas adoptadas en el ejercicio de su competencia como Vicerrector Administrativo y además, que hay personal de seguridad bajo la jurisdicción de los Decanos; 5) copia certificada de Memorándum No. 002-2020/2019-2023 de fecha 21 de enero de 2020, en la que se estipulan otras medidas de seguridad a adoptar como la portación obligatoria del carnet; 6) copia certificada de nota con REF. CESSO 0162/2020, de fecha 7 de febrero de 2020, en la cual solicitó a las Decanas de la Facultad de Medicina y Facultad de Química y Farmacia, así como al Decano de la Facultad de Odontología, su apoyo en el sentido de restringir las ventas no autorizadas del recinto universitario en la respectiva Facultad; y 7) Copia certificada de nota con REF.VRAD 0264 - 2020/2019-2023 de fecha 06 de marzo de 2020, dirigida al [REDACTED], en su calidad de Coordinador de la Unidad de Seguridad Institucional, en la que le instruyo a informar a los estudiantes con ventas dentro del campus universitario, se les refiera el Acuerdo de Consejo Superior Universitario No. 009-2019-2021 (VIII-18.2), tomado en sesión ordinaria del día 06 de febrero de 2020, previamente citado, el cual manifiesta la no autorización de ventas.

Delimitados los medios probatorios, sostuvo que todos los documentos relacionados comprueban que la actuación de **Juan Rosa Quintanilla Quintanilla**, se encontraba amparada en el facultades y atribuciones que le han sido conferidas en su cargo como Vicerrector Administrativo, a través del Reglamento General para el Ingreso Vehicular y Control Peatonal en la Universidad; asimismo, agregó que el documento ofrecido en su informe de defensa relativo a: “Perfil de Fortalecimiento de la Video Vigilancia de fecha 9 de noviembre de 2019”, el cual contenía al costado escrito a lápiz: “*información reservada*”, poseía dicha calidad, por lo que, desistió de su ofrecimiento.

Posteriormente, se corrió traslado al denunciante de la prueba ratificada por el denunciado a través de su apoderado para que manifestara su posición, quién únicamente expresó desconocer la comunicación que existe entre la secretaría de asuntos académicos central con la administración académica de las facultades, puesto que su activación como estudiante de la UES fue el 6 de noviembre de 2019, además, agregó que existe una mala interpretación de las autoridades del término “estudiante activo” ya que, el artículo 40 de la Ley Orgánica de la UES, hace referencia que la calidad de un estudiante puede ser “regular” o “vigente”, esta última es la que tenía al momento de ocurrir los hechos.

Luego, se procedió a hacer de conocimiento de las partes, la admisión de los medios de prueba ofertados, en relación a los de la parte denunciante, se admitieron los siguientes elementos: “a) copia de comprobante a su nombre, de estudiante activo en la facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador y copia de pagos a su nombre, realizados a la Universidad, b) copia de solicitud de acceso a la información personal presentada ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de Universidad de El Salvador (UES), el veinticinco de febrero de este año, por medio de la cual requirió acceso a: se le informe si se ha dado apertura a procedimientos sancionatorios o si existen denuncias en su contra; c) copia de solicitud de acceso a la información personal presentada ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de Universidad de El Salvador (UES), el diecinueve de febrero de dos mil veinte, a través de la cual, requirió: acceso al informe presentado el treinta de enero de este año, ambos documentos con la información entregada por parte de la oficial de información de la Universidad de El Salvador, para dar respuesta a sus solicitudes”.

Respecto de los medios probatorios ofertados por el denunciado se admitieron los documentos siguientes: “a) nota con REF VRAD 164-2020/2019-2023, de fecha 3 de febrero de

2020, con la que se comprueba, que en la nota dirigida al personal de seguridad institucional; se les solicitaba que cumplieran con la orden de impedir el ingreso; en ningún momento se instruyó pegar la referida nota en las casetas de la Universidad; b) copia certificada de informe de fecha de fecha 30 de enero de 2020, recibido en fecha 31 de enero del mismo año, remitido por el señor [REDACTED] en su calidad de supervisor, con el cual se comprueba que día 30 de enero del corriente, los señores [REDACTED] y [REDACTED], fueron identificados a través de sus documentos únicos de identidad y se encontraban en evidente estado de ebriedad lo cual es una infracción disciplinaria; c) copia certificada de nota con REF VRAD 164-A-2020/2019-2023, de fecha 31 de enero de 2020, dirigida al Ing. Carlos Ernesto Vargas Ramos, secretario de asuntos académicos y copia certificada de nota de fecha de 3 febrero de 2020, en la que el Ing. Carlos Ernesto Vargas Ramos, secretario de asuntos académicos, responde a los señores [REDACTED] y [REDACTED], a la fecha 3 de febrero eran estudiantes inactivos, el primero desde el ciclo I/2007 y el segundo desde el ciclo II/2017; d) copia de nota con REF.VRAD 164-B 2020/2019-2023 de fecha 31 de enero de 2020, dirigida al licenciado Benjamín Humberto Pérez Pineda, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, solicitando informe si aparecen en el registro de trabajadores de la UES, los señores [REDACTED] y [REDACTED] y copia certificada de nota de fecha 3 de febrero de 2020, en la que el licenciado Benjamín Humberto Pérez Pineda, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos responde que los señores [REDACTED] y [REDACTED], a la fecha 3 de febrero no aparecían en el registro de trabajadores de la UES; e) copia simple de requerimiento de información con referencia UAIP/DP 10.1/2020, de fecha de 12 de febrero 2020, de datos personales del señor [REDACTED], dirigido a mi persona por parte de la oficial de información de la UES y copia certificada de la respuesta brindada por el Coordinador de la Unidad de Seguridad Institucional, licenciado [REDACTED] en la que consta el nombre de los custodios; f) copia de nota con REF. VRAD 0284-2020/2019-2023, de fecha 6 de marzo de 2020, en la cual solicitó al Coordinador de la Unidad de Seguridad Institucional, licenciado Walter Adonay Brizuela Alvarenga, le proporcionará la bitácora correspondiente al 3 de enero de 2020 y copia certificada de nota de fecha 9 de marzo de 2020, en la que el licenciado Walter Adonay Brizuela Alvarenga, entrega la bitácora solicitada donde consta algunos detalles, de los hechos ocurridos el 30 de enero de 2020, en relación a los señores [REDACTED] y [REDACTED], copia simple de la bitácora donde consta el informe de fecha 30 de enero de 2020; g) copia certificada de nota con REF. VRAD 0047/2015-2019 de fecha 20

de noviembre de 2019, dirigida al CSU, en donde, de conformidad al artículo 13 del Reglamento General de Servicio de Seguridad Institucional de la UES, esta se conforma por el Vicerrector Administrativo, el Director de la USI, dos Decanos designados por el CSU, el Fiscal General de la Universidad y un representante estudiantil designado por la AGU y el CSU, solicitando el nombramiento del CSU”.

En relación, al resto de documentos cuya finalidad era demostrar el conjunto de medidas de seguridad adoptada por el denunciado en su cargo de Vicerrector Administrativo de la UES, relativos a: “a) copia del Acuerdo del CSU, número cero cero cuatro-dos mil diecinueve-dos mil veintiuno-segunda parte (IV- cinco, cuatro), tomado en sesión ordinaria el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se nombran dos Decanos y el representante estudiantil que conforma en representación del CSU la Comisión de Seguridad; b) convocatoria número cero cero diez-dos mil diecinueve/dos mil diecinueve-dos mil veintitrés de fecha tres de diciembre de dos mil diecinueve de la Comisión de Seguridad, donde constan todos sus integrantes y cargos; c) copia certificada de nota con REF.VRAD cero once cero uno-dos mil veintidós mil diecinueve-dos mil veintitrés de fecha trece de febrero de dos mil veinte, dirigida al Lie. Ángel Benjamín Cestoni en su calidad de Director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, solicitando audiencia; d) copia certificada de nota con REF.VRAD cero doscientos cincuenta y uno-dos mil veinte/dos mil diecinueve-dos mil veintitrés, de fecha tres de marzo de dos mil veinte, dirigida al Comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas en su calidad de Director General de la Policía Nacional Civil, solicitando audiencia; e) copia certificada de nota con REF.VRAD cero doscientos cincuenta y dos-dos mil veinte/dos mil diecinueve-dos mil veintitrés de fecha tres de marzo de dos mil veinte, dirigida al Sub Comisionado [REDACTED] en su calidad de Jefe de la Delegación de San Salvador de la Policía Nacional Civil, solicitando audiencia; f) copia certificada de nota con REF. VRAD cero doscientos cuarenta y nueve/dos mil diecinueve-dos mil veintitrés, de fecha seis de marzo en la que se requiere a los Decanos y Decanas incorporar en el plan de compras e iniciar los trámites para la adquisición de uniformes, armas, porta equipo y radios portátiles para el personal de seguridad bajo su jurisdicción; g) copia certificada de Memorándum número cero cero dos-dos mil veinte/dos mil diecinueve-dos mil veintitrés de fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, en la que se estipulan otras medidas de seguridad a adoptar como la portación obligatoria del carnet”, se comunicó a las partes que no serían admitidos por no ser pertinentes ni útiles para dilucidar el objeto de la controversia en este procedimiento.

Asimismo, se les informó que no serían admitidos los medios de prueba siguientes: “a) copia simple de nota periodística del Diario de Hoy, titulada: “*tres ebrios golpean a estudiante de medicina en la UES*”, suscrita por la periodista [REDACTED] y [REDACTED], de fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, en la que se refería que los atacantes habían ingresado en estado de ebriedad y en un carro rojo, situación que generó que se profundizará sobre la investigación para determinar si los señores [REDACTED] y [REDACTED] estuvieron o no vinculados con tal hecho y se tomarán medidas preventivas, para evitar riesgos a los miembros de la comunidad universitaria, como fue prohibir el ingreso a las personas que los informes demostraron que no tenía vínculo académico con la institución; y, b) diligencias para mejor proveer de conformidad a lo dispuesto en el artículo noventa y tres de la LAIP, a la secretaría de asuntos académicos la información confidencial relativa a la fecha en que el señor [REDACTED] realizó el trámite de activación; lo cual, tuvo como motivación cambiar su condición de estudiante inactivo a estudiante activo para fundamentar su interés legítimo de ingresar al campus central, pero al momento de requerirse el informe correspondiente y emitir circular era estudiante inactivo desde hace tres años, tal y como consta en el informe adjunto emitido por el secretario de asuntos académicos”, en razón que, ya existía dentro del expediente administrativo relacionado con este procedimiento documentos que contribuyen a probar lo que a su vez, se pretendía con los mencionados, por tanto, resultaban sobreabundantes.

En etapa de alegatos, el denunciante [REDACTED] manifestó que se publicó su nombre y número de DUI, en una nota firmada y sellada por el denunciado en su calidad de Vicerrector Administrativo de la UES, la cual circuló dentro de las instalaciones de la UES y se colocó en los portones de acceso principal a dicha Universidad, situación que vulneró su imagen como ciudadano y miembro de la Comunidad Universitaria, sin habersele permitido defenderse en un procedimiento sobre los hechos que se le atribuían.

Por su parte, en esta misma etapa **Juan Rosa Quintanilla Quintanilla** a través de apoderado, indicó que la parte denunciante no acreditó durante la tramitación de este procedimiento que haya incurrido en la comisión de la infracción establecida en el artículo 76 letra “b” del apartado de las infracciones muy graves, en tanto no existe evidencia que la nota a la cual el denunciante hizo referencia en su escrito de apelación estuvo pegada en los portones de acceso a la UES y menos que circuló en el campus como se ha señalado; tampoco, que haya sido quien

ordenó la colocación de la nota en los lugares señalados o la persona que materialmente lo hizo, de ser ese el caso.

Aclarado el aspecto, relativo a la divulgación material de la nota, sobre la suscripción de esta, estableció el orden cronológico en el cual ocurrieron los hechos que motivaron su emisión, mencionado que el 30 de enero de este año, se dio un incidente en el parqueo de la UES, con dos personas en aparente estado de ebriedad en donde, se identificó al denunciante como una de ellas. Dicha situación se hizo de su conocimiento para dar cumplimiento a las obligaciones que establecen los artículos 4 y 25 del Reglamento General para el Ordenamiento del Ingreso Peatonal y Vehicular de la UES, por lo que, procedió a investigar si los involucrados en el hecho eran estudiantes activos de la Universidad o empleados con la finalidad de valorar las medidas a tomar. En ese sentido, al tener conocimiento que los involucrados no tenían calidad de estudiantes activos ni de empleados de la UES, suscribió la nota en referencia conforme a lo establecido en la normativa interna de la institución.

De tal manera, sostuvo su actuación se encontraba amparada en lo establecido en el artículo 34 letra “b” de la LAIP, el cual dispone que se puede entregar información confidencial sin el consentimiento del titular cuando se transmita entre entes obligados siempre y cuando los datos se destinen al ejercicio de sus facultades o cuando se trate de la investigación de delitos o infracciones administrativas. En ese orden, las notas dirigidas de su parte, al Consejo Superior Universitario (CSU), Asamblea General Universitaria (AGU) y las Decanas y Decanos de las Facultades, tienen su fundamento en las obligaciones que le han sido conferidas por la normativa de la UES.

Correlativo a ello, mencionó que para configurarse el supuesto establecido en el artículo 76 letra “b” del apartado de las infracciones muy graves de la LAIP, debe existir una intención de divulgar o entregar la información clasificada como reservada o confidencial, por tanto, al no ser ese el caso y encontrarse en el ejercicio de sus facultades no incurrió en la comisión del hecho que se le atribuye.

En alegatos finales, el denunciado reiteró su denuncia y expuso que la divulgación de la nota que originó los hechos objeto de este procedimiento ocasionó un grave perjuicio en su intimidad e imagen pues al ser de conocimiento público fue compartida en diferentes redes sociales.

Por su parte, el denunciado a través de su apoderado ratificó lo expuesto en sus alegatos iniciales y solicitó se desestime la denuncia incoada en su contra en tanto, sus actuaciones no incurren en la misma.

Análisis del caso.

Una vez establecido lo anterior, el orden lógico con el que se estructura esta resolución será el siguiente: **I.** En primer lugar, se hará referencia a la potestad sancionatoria del Estado y del principio de legalidad, como principios que rigen el ejercicio de dicha facultad por parte de este Instituto; **II.** Posteriormente, se expondrán breves consideraciones sobre la infracción muy grave de entregar o difundir información reservada o confidencial; **III.** Luego, se someterán a un test de determinación cada uno de los datos que a consideración del denunciante son confidenciales para determinar si procede dicha clasificación conforme a la Constitución, la LAIP y Tratados Internacionales; **IV.** Se analizarán los medios de prueba admitidos en el presente procedimiento; **V.** Determinados estos aspectos, se examinará si la actuación del denunciado se encontraba amparada en los supuestos establecidos en la LAIP y la normativa aplicable al caso; **VI.** Con dichos elementos, se concluirá si la actuaciones del denunciado encajan al cometimiento de la infracción objeto de la causa, conforme a los hechos probados y al test de clasificación de la información; **VII.** Finalmente, se hará mención a algunos aspectos relacionados con el deber de custodia de la información reservada o confidencial establecido en la LAIP.

I. A. La potestad sancionadora del Estado, conocida como *ius puniendi*, y concebida como la capacidad estatal de ejercer un control social coercitivo sobre actos ilícitos. Esta potestad se despliega, por una parte, en la rama del Derecho Penal —potestad penal judicial— y, por otra, en la Administración Pública. Esta materialización del *ius puniendi* en el campo administrativo se denomina potestad sancionadora de la Administración.

La principal justificación de la potestad sancionadora, ejercida por entes administrativos, atiende a razones pragmáticas, pues es necesaria para el cumplimiento de la finalidad última de la administración: “garantizar el mantenimiento del propio orden jurídico, el de la sociedad en conjunto, y el de la misma administración mediante la represión de todas aquellas conductas contrarias al mismo”. (Fallo: Sala de lo Contencioso Administrativo: 149-M-99, 19/12/2000).

Asimismo, la actividad de los administrados es controlada y seguida por la Administración Pública, por medio de técnicas permitidas, justificadas por la posibilidad de

tutelar los intereses sociales, de ahí que pueda imponer sanciones administrativas, puniendo actitudes lesivas —acciones u omisiones— a la esfera jurídica de los administrados.

Es dable resaltar el efecto disuasivo que la sanción, al igual que la pena en el ámbito penal, trae aparejada para el infractor de una norma. En ese sentido, a través de la corrección de conductas al margen de la ley —que pueden ocasionar consecuencias perniciosas a los beneficiados por ésta— se pretende reorientar actitudes que desde un inicio se perfilaban arbitrarias, a caminos iluminados por la legalidad, como el restablecimiento de la seguridad jurídica.

Así, sobre la base de los artículos 14 de la Constitución con relación al 58 letra “e” de la LAIP, este Instituto puede intervenir punitivamente en la esfera jurídica de los servidores públicos que provoquen una lesión o daño a los derechos que garantiza la mencionada ley, considerados estos como derechos fundamentales de los administrados, siempre que tales comportamientos se encuentren tipificados en el referido cuerpo normativo como infracciones plausibles acreedoras de una sanción de carácter pecuniario.

Dentro de esta potestad administrativa sancionadora, se encuentran fijados fines y principios que deben regir la valoración de los hechos e interpretación de las normas. Entre estos principios se encuentran: el principio de legalidad, lesividad del bien jurídico, culpabilidad y la prohibición de doble juzgamiento, que en doctrina se han denominado como el programa penal de la Constitución.

B. La jurisprudencia constitucional de nuestro país, que en esta ocasión hacemos nuestra, establece que el principio de legalidad en el ámbito sancionador, constituye una exigencia de seguridad jurídica que no sólo requiere el conocimiento previo de los delitos o infracciones y de las penas o sanciones, sino que también constituye una garantía política hacia el individuo de que no puede ser sometido a penas o sanciones que no hayan sido establecidas previamente, evitando así los abusos de poder. (Fallo: Sala de lo Constitucional, Proceso de Amparo de referencia 117-2003, 15/06/2004).

Es así, que el mencionado principio trae aparejadas implicaciones para la elaboración, interpretación y aplicación de la LAIP, en el sentido de que establece condiciones para la imposición de sanciones por infracciones a la Ley, tales como: i) que una ley describa la infracción y su punición; ii) que la ley no sea anterior al hecho; iii) que la ley sea precisa en su

lenguaje descriptivo con relación a la construcción de la infracción y precisa en el lenguaje normativo de las consecuencias que resulten de su cometimiento; y, iv) que se evite comprender supuestos que no se enmarquen dentro de su tenor.

II. En el artículo 76 de la LAIP el legislador prevé los tipos de infracciones que podrían ser cometidas por los servidores públicos, al quebrantar las disposiciones relativas al derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, en el ejercicio de sus funciones; y, a la vez, califica dichas infracciones en leves, graves y muy graves. Esta calificación ha sido determinada por el legislador atendiendo a la graduación del daño provocado como consecuencia de la comisión de la conducta tipificada en la citada disposición legal.

En consonancia con lo anterior, la LAIP en el artículo 58 letra “e” confiere expresamente, a este Instituto, la potestad de “conocer y resolver del procedimiento administrativo sancionatorio y dictar sanciones administrativas”.

El artículo 76, letra “b” de la LAIP, contempla como infracción muy grave el **“entregar o difundir información reservada o confidencial”**.

En ese sentido, es importante señalar que el acceso y la cesión de la información reservada y confidencial, se encuentra limitada a las personas o autoridades legitimadas para solicitarla y recibirla. Estas son: a) los titulares de los datos personales o sus representantes de acuerdo al artículo 31 de la LAIP; b) el ente obligado o las personas que cuente con el consentimiento expreso y libre, por escrito o por un medio equivalente del titular de los datos para difundir, distribuir o comercializarlos, de conformidad al artículo 33 de la LAIP; c) las autoridades competentes en el marco de sus atribuciones de acuerdo al artículo 26 de la Ley; d) aquellas situaciones que se encajan en las causales de difusión sin consentimiento del titular de datos, enmarcadas en el artículo 34 de la LAIP; y, e) las personas o instancias del ente obligado autorizadas para acceder a la información reservada, conforme al artículo 21 de la LAIP, en el apartado del contenido de la resolución donde se declara la reserva.

Por tanto, la difusión, distribución o comercialización de los datos personales, fuera de estos parámetros, podría encajar en lo previsto en la infracción antes referida, pues la utilización indebida de los datos personales, puede causar un grave perjuicio a sus titulares, desde el robo de identidad, decisiones automatizadas discriminatorias y la lesión a los derechos de intimidad y privacidad de los mismos.

III. En ese contexto, por dato personal de acuerdo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales de los Estados Unidos Mexicanos (INAI), en su resolución de fecha 1 de febrero de 2017, de referencia RRA 3995/16, y que ahora hacemos nuestra, se entiende toda aquella información relativa a un individuo identificado o identificable que, entre otras cosas, le dan identidad, lo describen, precisan su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional. Asimismo, señalan aspectos sensibles o delicados sobre tal individuo, como es el caso de su domicilio, teléfono, sus características físicas, ideología o vida sexual, entre otros.

Por otro lado, el artículo 31 de la LAIP establece que: *“Toda persona, directamente o a través de su representante, tendrá derecho a saber si se están procesando sus datos personales; a conseguir una reproducción inteligible de ella sin demora; a obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los registros sean injustificados o inexactos y a conocer los destinatarios cuando la información sea transmitidas, permitiéndole conocer las razones que motivaron su petición, en los términos de esta ley. El acceso a los datos personales es **exclusivo de su titular o su representante**”* (la negrita es nuestra).

También el artículo 32 de la referida Ley establece que: *“Los entes obligados serán responsables de proteger los datos personales y en relación con éstos, deberán: [...] e. Adoptar medidas que protejan la seguridad de los datos personales y eviten alteración, pérdida, transmisión y **acceso no autorizado**”* (la negrita es nuestra).

Asimismo, la Sala de lo Constitucional en la Sentencia Definitiva de Amparo del día cuatro de marzo de 2012 de referencia 934-2007, reconoció que la protección de los datos es el medio por el cual se salvaguarda los objetivos de la faceta material del derecho a la autodeterminación informativa, teniendo este su fundamento en la seguridad jurídica artículo 2 inc. I de la Constitución de la República; asimismo, estableció que la protección de este derecho, pretende satisfacer la necesidad de las personas de preservar su identidad ante la revelación y el uso de los datos que les conciernen, y que este no puede limitarse a determinado tipo de datos — sensibles o íntimos—; lo decisivo es la utilidad y el tipo de procesamiento que de los mismos se haga, pues se requiere conocer el contexto en que se utiliza o se pretenda utilizar.

Por ello, el grado de sensibilidad o intimidad del dato personal ya no depende si afecta o no la esfera íntima o privada de la persona: hace falta, conocer la relación de utilización de un

dato para poder determinar sus implicaciones con el individuo; es decir, determinar la verdadera finalidad, y que posibilidades de interconexión y de utilización existen, solo así se podrá descifrar la licitud de las restricciones al derecho a la autodeterminación informativa o protección de datos personales.

Este derecho también se encuentra reconocido en los tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico salvadoreño, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16), al interpretar estas disposiciones, los Organismos Internacionales han destacado la noción de las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos.

En ese sentido, la LAIP en su artículo 24, ha determinado que es información confidencial: *c. los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para la difusión*; asimismo, que requieren el consentimiento expreso y libre del titular de los mismo, conforme al artículo 25 de la Ley.

Por tanto, podemos concluir que la sensibilidad del dato personal no es el único aspecto para determinar la necesidad del consentimiento para su divulgación, sino cuando este le concierna únicamente a su titular y su recolección no fue con la finalidad de divulgarlo o proporcionar, también qué posibilidades de interconexión y de utilización existen, en detrimento a los derechos de los titulares de los datos personales. Lo anterior, en ejercicio al derecho a la autodeterminación informativa que supone la capacidad de las personas de decidir y controlar las actividades relacionadas con sus datos personales.

Conforme a lo antes mencionado, se establece como una limitante al derecho de acceso a la información aquella documentación que se considere confidencial; sin embargo para que determinada información se clasifique con ese carácter, conforme al artículo 24 letra “c”, a consideración de este Instituto debe cumplirse los siguientes requisitos:

1. Que se trate de datos personales:

- Información concerniente a una persona, y

- Que ésta sea identificada o identificable, se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente, siempre y cuando esto no requiera plazos o actividades desproporcionadas¹.

2. Que para la difusión de los datos se requiera el consentimiento del titular.

Esto último, no se requerirá en los casos que la Ley lo determine, y los supuestos del artículo 34 de la LAIP.

Por ello, previo a determinar conforme a los elementos probatorios incorporados por las partes y admitidos en la audiencia oral relacionada con este procedimiento, si el denunciado ha incurrido en la comisión de la infracción que se le atribuye, debe analizarse cada uno de los datos que a consideración del denunciante titular de información contenida en la nota con referencia: REF.VRAD 164-2020/2019-2023 de fecha 3 de febrero de este año-suscrita por **Juan Rosa Quintanilla Quintanilla**, Vicerrector Administrativo-, son confidenciales para determinar si procede esa clasificación.

El denunciante señaló que en la nota en referencia se había vulnerado su derecho a la protección de datos personales, al consignar su información relativa a: 1. Nombre y 2. Número de Documento Único de Identidad.

1. En relación al primero de ellos, se ha sostenido por parte de Instituto, que si un ente obligado cuenta con registros de información que posean nombres de personas naturales o jurídicas tiene la obligación de resguardar la información y únicamente entregarla si existe consentimiento expreso del titular de la información-esto no es aplicable cuando se trate de personas que son servidores públicos o exista una habilitación legal-, pues es un dato personal que permite identificar a su titular. Esta obligación es extensible a los servidores y funcionarios públicos que tienen acceso a esos registros en el marco de sus atribuciones legales. La protección de este dato, también tiene su fundamento en la información que asocie al mismo, en tanto pueden relacionarse al nombre datos personales sensibles como los regulados en el artículo 6 letra “b” de la LAIP, identificando a la persona y aspectos de su vida íntima.

¹ Art. 2 “Definiciones” de los Estándares de Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos, aprobados el 20 de junio de 2017, en Santiago de Chile.

2. De acuerdo con lo señalado en el artículo 3 de la Ley Especial Reguladora de la Emisión del Documento Único de Identidad (LEREDUI). *“es el documento oficial, suficiente y necesario para identificar fehacientemente a toda persona natural, salvadoreña, en todo acto público o privado, tanto dentro del país, como en el extranjero, cuando dichos actos surtan efectos en El Salvador”*. También establece en su artículo 4-A. que: *“el DUI deberá contener una numeración correlativa de orden, siendo este número único para individualizar a cada persona, el que en ningún caso podrá modificarse ni reasignarse a otra”*.

Adicionalmente, es conveniente señalar que para obtener ese documento por parte de las personas físicas, debe hacerlo personalmente el interesado, ya que el artículo 4-C de la LEREDUI, establece que es un trámite personalísimo, debiendo acreditar su identidad por medio de cédula de identidad personal, carné electoral, pasaporte, documento único de identidad, o cualquier otro documento de identidad que a criterio del RNPN identifique fehacientemente al solicitante (artículo 4-B de la LEREDUI).

En ese sentido, el número del DUI de una persona física, es un elemento susceptible de ser vinculado al nombre de su titular, ya que existen plataformas electrónicas oficiales del Estado, como la del Tribunal Supremo Electoral donde puede visualizarse, su nombre completo, el lugar donde ejercerá el sufragio y el departamento y municipio de residencia. También que es una homoclave única e irrepetible, por tanto es un dato personal que únicamente le concierne a su titular y cuya finalidad es identificarlo en un acto público o privado, bajo su autorización o cuando una ley lo señale, y no para la cesión a terceros para otras finalidades fuera del objeto antes referido.

Por lo que es susceptible de clasificarse en términos de lo dispuesto en el artículo 24 letra “c” de la LAIP, como **información confidencial**. Dicha clasificación también le aplica al número de DUI de los servidores públicos, ya que es un elemento que no es indispensable para la controlaría ciudadana de sus funciones públicas, a través del derecho de acceso a la información pública. Este criterio es compartido también en el derecho comparado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) de la República de Chile en sus resoluciones de referencia C-283-10, A10-09 y A126-09 en el caso de dato personal RUT o RUN, y por el INAI de México en la referencia antes mencionada en este romano, en el caso del dato personal CURP.

De lo anterior se advierte, que los datos del denunciante consistentes en su nombre y número de DUI, constituyen sus datos personales que permiten identificarlo de manera fehaciente por lo que, todo tratamiento que de estos se haga por parte de un ente o persona física obligada al cumplimiento de la LAIP debe contar con su consentimiento o estar amparada en ley en sentido formal que lo legitime y acorde a los fines brindados y proporcionales no así, para la divulgación masiva de la información.

IV. En este apartado, se procede a detallar los insumos probatorios que obran en el presente procedimiento a efecto de determinar los hechos acreditados.

De la prueba ofertada por el denunciante, se admitieron los siguientes elementos: “a) copia de comprobante a su nombre, de estudiante activo en la facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador y copia de pagos a su nombre, realizados a la Universidad, b) copia de solicitud de acceso a la información personal presentada ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de Universidad de El Salvador (UES), el veinticinco de febrero de este año, por medio de la cual requirió acceso a: se le informe si se había dado apertura a procedimientos sancionatorios o si existen denuncias en su contra; c) copia de solicitud de acceso a la información personal presentada ante la Unidad de Acceso a la Información Pública de Universidad de El Salvador (UES), el diecinueve de febrero de dos mil veinte, a través de la cual, requirió: acceso al informe presentado el treinta de enero de este año. -ambos documentos con la información entregada por parte de la oficial de información de la Universidad de El Salvador, para dar respuesta a sus solicitudes”.

Al respecto de los medios probatorios ofertados por el denunciante se admitieron los documentos siguientes: “a) nota con REF VRAD 164-2020/2019-2023, de fecha 3 de febrero de 2020, con la que se comprueba, que en la nota dirigida al personal de seguridad institucional; se les solicitaba que cumplieran con la orden de impedir el ingreso; en ningún momento se instruyó pegar la referida nota en las casetas de la Universidad; b) copia certificada de informe de fecha de fecha 30 de enero de 2020, recibido en fecha 31 de enero del mismo año, remitido por el señor José David García en su calidad de supervisor, con el cual se comprueba que día 30 de enero del corriente, los señores [REDACTED] y [REDACTED], fueron identificados a través de sus documentos únicos de identidad y se encontraban en evidente estado de ebriedad lo cual es una infracción disciplinaria; c) copia certificada de nota con REF VRAD 164-A-2020/2019-2023, de fecha 31 de enero de 2020, dirigida al Ing. Carlos Ernesto Vargas

Ramos secretario de asuntos académicos y copia certificada de nota de fecha de 3 febrero de 2020, en la que el Ing. Carlos Ernesto Vargas Ramos, secretario de asuntos académicos, responde a los señores [REDACTED] y [REDACTED], a la fecha 3 de febrero eran estudiantes inactivos, el primero desde el ciclo I/2007 y el segundo desde el ciclo II/2017; d) copia de nota con REF.VRAD 164-B 2020/2019-2023 de fecha 31 de enero de 2020, dirigida al licenciado Benjamín Humberto Pérez Pineda, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, solicitando informe si aparecen en el registro de trabajadores de la UES, los señores Samuel [REDACTED] y [REDACTED]; y copia certificada de nota de fecha 3 de febrero de 2020, en la que el licenciado Benjamín Humberto Pérez Pineda, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos responde que los señores [REDACTED] y [REDACTED] a la fecha 3 de febrero no aparecían en el registro de trabajadores de la UES; e) copia simple de requerimiento de información con referencia UAIP/DP 10.1/2020, de fecha de 12 de febrero 2020, de datos personales del señor [REDACTED], dirigido a mi persona por parte de la Oficial de Información de la UES y copia certificada de la respuesta brindada por el Coordinador de la Unidad de Seguridad Institucional, licenciado [REDACTED] en la que consta el nombre de los custodios; f) copia de nota con REF. VRAD 0284-2020/2019-2023, de fecha 6 de marzo de 2020, en la cual solicitó al Coordinador de la Unidad de Seguridad Institucional, licenciado [REDACTED], le proporcionará la bitácora correspondiente al 3 de enero de 2020 y copia certificada de nota de fecha 9 de marzo de 2020, en la que el licenciado [REDACTED], entrega la bitácora solicitada donde consta algunos detalles, de los hechos ocurridos el 30 de enero de 2020, en relación a los señores [REDACTED] y [REDACTED], copia simple de la bitácora donde consta el informe de fecha 30 de enero de 2020; g) copia certificada de nota con REF. VRAD 0047/2015-2019 de fecha 20 de noviembre de 2019, dirigida al CSU, en donde, de conformidad al artículo 13 del Reglamento General de Servicio de Seguridad Institucional de la UES, esta se conforma por el Vicerrector Administrativo, el Director de la USI, dos Decanos designados por el CSU, el Fiscal General de la Universidad y un representante estudiantil designado por la AGU y el CSU, solicitando el nombramiento del CSU”.

En ese sentido, los insumos probatorios que obran en este procedimiento administrativo sancionador, se constituyen como prueba documental reconocida por el CPCPM, que regula lo referido al ámbito probatorio en los procedimientos que tramita la Administración Pública, de

acuerdo al artículo 106 de la LPA. Dicho esto, y habiendo enunciado cada uno de los medios probatorios que obran en este procedimiento, este Instituto, para valorar cada insumo probatorio que consta en el presente, se auxilia de los artículos 341 y 416 del CPCM, que establecen, de forma categórica el valor probatorio que merecen los medios que consten en el procedimiento. Siendo el caso de los documentos públicos y privados que constituyen prueba fehaciente de los hechos, siempre y cuando su contenido no haya sido controvertido.

En cuanto a los hechos acreditados con base a los insumos probatorios descritos previamente se ha determinado: i) que el 30 enero de este año, José David García Supervisor de Seguridad Institucional de la UES, informó a **Juan Rosa Quintanilla Quintanilla** Vicerrector Administrativo de dicha entidad, que ese día se le dio aviso por parte del encargado de parqueo, que dos sujetos que se encontraban en estado de ebriedad, estos fueron identificados como: [REDACTED] con número de carnet [REDACTED] y número de [REDACTED] [REDACTED] con número de DUI [REDACTED], propietario del vehículo placas [REDACTED] color rojo, marca Nissan, hecho al cual se hizo presente la PNC; ii) que producto de dicho informe, el 31 de enero de este año, **Juan Rosa Quintanilla Quintanilla** Vicerrector Administrativo de la UES, emitió nota con referencia REF.VRAD 164-A 2020/2019-2023, dirigida al Ingeniero Carlos Ernesto Vargas en su calidad de Secretario de Asuntos Académicos de la UES, solicitando le informará si [REDACTED] y [REDACTED] [REDACTED], se encontraban registrados como estudiantes activos; iv) en la misma fecha y sentido, emitió nota con referencia REF.VRAD 164-A 2020/2019-2023 dirigida al licenciado Benjamín Alberto Pérez Pineda, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la UES; v) que el 3 de febrero de este año, recibió respuesta por parte del Ingeniero Carlos Ernesto Vargas en su calidad de Secretario de Asuntos Académicos de la UES, comunicándole que luego de haberse revisado los registro que posee la UES, en esa fecha, el sistema Prometeo reflejo que los estudiantes se encontraban inactivos, en el caso de [REDACTED] se evidencio que el último ciclo inscrito fue I/2007 y respecto de [REDACTED], el último ciclo inscrito fue II/2017; así como, respuesta por parte del licenciado Benjamín Alberto Pérez Pineda Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la UES, informándole que las personas mencionadas no eran empleados de la UES; vi) que a fecha 3 de febrero de este año, [REDACTED] y [REDACTED], no eran estudiantes activos ni empleados de la UES; vii) que el 3 de febrero de este año, **Juan Rosa Quintanilla Quintanilla** Vicerrector Administrativo, emitió nota con referencia REF.VRAD 164-2020/2019-2023, dirigida a la Unidad de Seguridad

Institucional de la UES, en la cual consignó: “en relación a la nota de fecha 30 de enero de 2020, en la que se informa que ese mismo día en turno de las 6:00 am, dos personas con los nombres [REDACTED] número de DUI [...] y Cristian Antonio Torres V con número de DUI [...], propietario del vehículo placas [REDACTED] color rojo, marca Nissan de dos puertas se presentaron en estado de ebriedad a las instalaciones de la UES y según noticias publicadas en medios digitales se presume agredieron a un estudiante de la facultad de medicina. Sobre el particular y con base al artículo 14 y 15 del Reglamento General para el Ingreso y Ordenamiento Vehicular en la UES, solicitó su valiosa colaboración para que a partir de este día (3 de febrero de 2020) se prohíba el ingreso del señor [REDACTED] y del vehículo mencionado”. (Sic); viii) que en fecha 6 de noviembre de 2019, el usuario en línea de [REDACTED] reflejaba que se encontraba como estudiante activo inscrito en la carrera Profesorado en Idioma Ingles; ix) que, [REDACTED] posee talonario de pagos relativos a este año en la UES; x) que, [REDACTED] requirió a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la UES, información relacionada con el hecho ocurrido el 30 de enero de este año en la UES en el cual se vio involucrado, específicamente: informe del personal de seguridad institucional que se encontraba laborando en el turno de la mañana, el cual le fue entregado y en donde consta lo consignado en la nota emitida por el Supervisor de Seguridad Institucional, el 30 de enero de este año; xi) que hasta el 25 de febrero de 2020, [REDACTED] no tenía procedimientos administrativos disciplinarios abiertos en su contra, según la nota emitida en esa fecha por Juan Carlos Cruz Cubias, secretario de la Facultad de Ciencias y Humanidades; xii) que la Comisión de Seguridad Universitaria de la UES, se encuentra integrada de la forma siguiente: el Vicerrector Administrativo o su delegado, el Director de la Unidad de Seguridad Institucional, dos Decanos designados por el Consejo Superior Universitario, el Fiscal General de la UES, un representante estudiantil de la AGU y el CSU.

V. Establecidos los hechos acreditados en este procedimiento y habiéndose determinado que los datos del denunciante contenidos en la nota de referencia REF.VRAD 164-2020/2019-2023 de fecha 3 de febrero de 2020, constituyen datos personales conforme a lo establecido en el artículo 6 de la LAIP, y solo pueden ser divulgados de forma proporcional con la finalidad que se ha mencionado, corresponde en este apartado examinar si la actuación del denunciado se encontraba amparada en los supuestos establecidos en la LAIP y la normativa aplicable al caso.

Previo a ello, es oportuno señalar que no quedó acreditado en este procedimiento conforme a los elementos probatorios descritos en romano que antecede que la nota en referencia se encontrará publicada en las casetas de acceso a la UES o en adherida al interior de sus instalaciones.

Al respecto, es menester señalar que el *ius puniendi* del Estado encuentra su fundamento teórico en el marco del respeto al ordenamiento jurídico en su conjunto, dentro de los postulados esenciales a todo Estado constitucional de Derecho, se encuentra el principio de presunción de inocencia o de no culpabilidad el cual según la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema Justicia (CSJ) posee al menos tres significados diferenciados: i) es una garantía básica del proceso penal, ii) es una regla referida al tratamiento del imputado durante el proceso y iii) es una regla relativa a la actividad probatoria. Sobre el último ítem, interesa indicar que la prueba en un procedimiento administrativo sancionador [en principio y por regla general] debe ser suministrada por la administración *imponiéndose siempre la absolución ante la carencia de prueba de cargo suficiente*; es decir, en el plano subjetivo se estatuyen diversas cargas que determinan a cada parte su interés en probar el hecho alegado de cara a obtener el éxito en las results del procedimiento, por ello, se configura la obligación a la parte procesal que afirma un hecho o circunstancias que aporte que aporte los medios necesarios o idóneos para su acreditación ello se conoce como la carga de la prueba².

En este entendido, la difusión del dato y la habilitación legal para ello, se analizará respecto de la suscripción de la nota REF.VRAD 164-2020/2019-2023 de fecha 3 de febrero de 202, por parte del denunciado y su presunta remisión a los organismos universitarios siguientes: Consejo Superior Universitario (CSU), Asamblea General Universitaria y Decanos de las Facultades, lo cual si fue acreditado en este procedimiento.

Al respecto, los artículos 33 y 34 de la LAIP se desprende que todo tratamiento de datos personales que realicen los entes obligados a su cumplimiento debe ser legítimo, en otras palabras, debe mediar el consentimiento de su titular o existir una disposición legal habilite dicho tratamiento, entendiéndose este último como: *“cualquier operación o conjunto de estas efectuadas mediante procedimiento físicos o automatizados, realizadas sobre datos personales*

² Sentencia emitida a las once horas con cuarenta y nueve minutos del 25 de noviembre de 2019, bajo la referencia: 47-2013.

relacionados de manera enunciativa mas no limitativa, con la obtención, el acceso, registro, organización, estructuración, adaptación, consulta, transferencia difusión, posesión aprovechamiento y en general cualquier uso o disposición de datos personales”³.

En el caso concreto, el tratamiento realizado por parte del denunciado en su calidad de Vicerrector Administrativo de la UES, consistió presuntamente en una difusión de sus datos a través de la nota de referencia REF.VRAD 164-2020/2019-2023 de fecha 3 de febrero de 2020, la cual fue remitida a organismos institucionales de la Universidad.

Lo antes mencionado, debido a que la emisión de la nota no contaba con el consentimiento del titular de parte de la información en ella contenida. En ese sentido, es preciso indicar que por regla general la difusión de datos personales se encuentra prohibida, por lo que, las excepciones a la misma deben estar reguladas por la ley. Así, el artículo 34 de la LAIP dispone que los entes obligados deberán proporcionar o divulgar datos personales sin el consentimiento de su titular en los supuestos ahí normados, interesa en este caso hacer referencia a dos de ellos alegados por el denunciado como la habilitación legal para la suscripción de la nota estos son los establecidos en las letras “b” y “c” de la citada disposición.

La primera, establece que se podrán tratar datos personales sin el consentimiento de su titular entre entes obligados, siempre y cuando los datos se destinen al ejercicio de sus facultades. Esta excepción tiene su fundamento en las atribuciones y facultades propias de la institución que se trate, contribuyendo al óptimo desarrollo de la función pública. Sin embargo, su aplicación se encuentra sujeta de manera enunciativa a los supuestos siguientes: 1. La existencia de una norma que habilite dicho tratamiento generalmente ligada a la función principal de la institución; 2. Que dicho tratamiento se realice entre el mismo ente obligado o entes obligados al cumplimiento de la LAIP; y 3. Que en la entrega se justifique indicando la disposición legal aducida.

Sobre la segunda, este Instituto considera que para que una situación encaje en ese supuesto, se requiere de tres condiciones indispensables: 1. Que exista una investigación de delitos o de infracciones administrativas abierta en contra del titular del dato o que esté relacionado directamente; 2. Que la entidad pública esté habilitada por ley para dirigir ese tipo de investigaciones; y, 3. Que exista un procedimiento especial para requerir ese tipo de

³ Estándares de Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos.

información al ente obligado que los tenga en su poder. La entidad requirente deberá solicitarlo por resolución u orden fundada.

Precisado lo anterior, se advierte que la nota de referencia REF.VRAD 164-2020/2019-2023 de fecha 3 de febrero de 2020, emitida por **Juan Rosa Quintanilla Quintanilla** no se encontraba amparada en la excepción regulada en el artículo 34 letra “c” de LAIP, puesto que no existía un procedimiento administrativo disciplinario en contra del denunciante.

De ese modo, atañe examinar si dicha actuación se encontraba apegada a la primera de las excepciones; es decir, la dispuesta en el artículo 34 letra “b” de la LAIP. Sobre esta, el denunciado señaló en su informe de defensa y en la audiencia oral relacionada con este procedimiento, que la suscripción de la nota y la consignación de los datos del denunciante en esta, fue conforme a las atribuciones conferidas en su calidad de Vicerrector Administrativo. Partiendo de este elemento, el artículo 28 de la Ley Orgánica de la UES, regulan las atribuciones y deberes del cargo en referencia y en su letra m) dispone: “*las demás atribuciones que señalen esa Ley y los reglamentos*”, en ese sentido, en la nota se citaron de su parte los artículos 14 y 15 del Reglamento General de Ordenamiento para el Control de Ingreso Peatonal y Vehicular de la UES, para prohibir el ingreso al denunciante.

Esta última norma, tiene como finalidad regular el ingreso y desplazamiento peatonal y vehicular como el ordenamiento y la permanencia de vehículos en el campus universitario la protección de estos y del campus universitario, para su operativización se designará un gerente administrativo o en su defecto el Vicerrector Administrativo de la UES. La aplicación de las sanciones por la comisión de las infracciones reguladas en dicha norma corresponde al Vicerrector Administrativo-artículo 15 del Reglamento-.

En ese sentido, el artículo 16 letra “a” de dicho Reglamento establece que constituye una infracción muy graves: “manejar en estado de embriaguez o bajo los efectos estupefacientes”, esta será sancionada con la prohibición del ingreso vehicular durante un año calendario.

Por otro lado, el Reglamento General del Servicio de Seguridad Institucional de la UES dispone la creación de la Unidad de Seguridad Institucional (USI)-artículo 7-, la cual estará a cargo del Vicerrector Administrativo, esta Unidad es la responsable de la seguridad institucional y de la protección de los miembros de la comunidad universitaria, esta tiene la estructura administrativa siguiente: “a) Vicerrectoría Administrativa. b) Comisión de Seguridad

Universitaria (CSU), c) Dirección, d) Subdirección y e) personal administrativo”; entre sus funciones se encuentra la de colaborar con el ordenamiento de la circulación peatonal atendiendo a lo establecido en el Reglamento General de Ordenamiento para el Control de Ingreso Peatonal y Vehicular de la UES.

Asimismo, el Reglamento General del Servicio de Seguridad Institucional, atribuye al Vicerrector Administrativo, entre otras cosas: ordenar medidas urgentes y necesarias para dar respuesta a contingencias, así como, integrar la Comisión de Seguridad Universitaria (CSU) cuya principal finalidad es la prevención de contingencias a través de políticas de seguridad. La Comisión de Seguridad Universitaria (CSU) se encuentra integrada de la forma siguiente: a) Vicerrector Administrativo, b) el Director de la USI, c) Decanos designados por el CSU, d) el Fiscal General de la UES y e) un representante estudiantil de la AGU y el CSU-artículo 13 del Reglamento-.

Dichos instrumentos normativos indican que existe una la obligación de la UES a través de sus distintos funcionarios de garantizar la seguridad institucional, para ello, atribuye a cada organismo funciones que contribuyan con el ordenamiento vehicular y peatonal, así como, el ingreso de estos al campus universitario, unido a ello, regulan infracciones a los mismos y los competentes para la imposición de sanciones.

VI. En este orden, conforme a lo dilucidado en el romano que antecede, se advierte que la suscripción de la nota se encontraba amparada en la facultad establecida en los artículos 15, 16 del Reglamento General de Ordenamiento para el Control de Ingreso Peatonal y Vehicular de la UES y el artículo 10 literal b, del Reglamento General del Servicio de Seguridad Institucional de la UES, como una medida de contingencia para dar respuesta a la situación informada por parte del Supervisor de Seguridad de la UES, luego de haber constado que el denunciante no tenía la calidad de estudiante activo según la respuesta brindada por parte del secretario de asuntos académicos.

Asimismo, se ha evidenciado que todas las autoridades a las que consta fue copiada la nota que dio origen a este procedimiento realizan funciones de seguridad en la UES, por lo que, no se evidencia que haya existido una divulgación antojadiza por parte del denunciado a los órganos copiados en la nota, si no, más bien la intención de informar sobre el hecho acaecido para que cada uno de los organismos tomara las acciones necesarias y convenientes.

En consecuencia, el funcionario público **Juan Rosa Quintanilla Quintanilla**, Vicerrector Administrativo de la Universidad de El Salvador (UES) no ha incurrido en la infracción atribuida, en tanto, la nota que sirvió de base para denunciar los hechos objeto de este procedimiento la cual contenía el nombre y número de DUI del denunciante, fue suscrita por el referido en el marco de las atribuciones legales descritas en los reglamentos antes relacionados, por tanto, la remisión de esta al Supervisor de Seguridad Institucional se encontraba amparada en lo dispuesto en el artículo 34 letra “b” de la LAIP, así como, la copia que se remitió a los organismos consignados en ella.

Cabe además, mencionar en este apartado que la competencia de este Instituto se limita a las facultades y atribuciones otorgadas por el legislador en el artículo 58 de la LAIP, por lo que, no corresponde conocer y determinar si la medida de prohibir el ingreso peatonal y automovilístico del denunciante, adoptada por el denunciado en su calidad de Vicerrector Administrativo de la UES, conforme a la atribuciones a él conferidas en los artículos 15, 16 del Reglamento General de Ordenamiento para el Control de Ingreso Peatonal y Vehicular de la UES y el Reglamento General del Servicio de Seguridad Institucional para dar respuesta a la contingencia de seguridad en la cual resultó señalado el denunciante era o no, proporcional con los hechos sucedidos.

VII. Por último es preciso indicar, que conforme a lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la LAIP, las autoridades públicas que tengan acceso a información confidencial y reservada en el marco de sus atribuciones legales tienen el deber de custodia y resguardo de esta, de lo contrario incurrirán en responsabilidades previstas en la LAIP.

Es por ello, que para el caso en concreto debe recomendarse al denunciado **Juan Rosa Quintanilla Quintanilla**, Vicerrector Administrativo de la Universidad de El Salvador (UES) que al suscribir un documento como la nota de referencia REF.VRAD 164-2020/2019-2023 de fecha 3 de febrero de 2020, consigne en esta que la información se hace de conocimiento únicamente para la finalidad señalada no así, para cualquier tipo de tratamiento no autorizado como su publicación en la casetas colocadas en los diferentes accesos de la Universidad. De igual forma, debe consignar la persona específica a quién se remite; es decir, para el caso, de los organismos universitarios a la persona o personas, a quienes en motivo de su cargo o calidad se les comunica la información pertinente. Finalmente, que evite colocar información adicional relacionada con el titular de los datos como presunciones sobre la comisión de conductas que

podrían llegar a constituir delitos, máxime cuando al titular de la información no se le ha seguido un procedimiento conforme a derecho en el que hayan quedado probado los hechos atribuidos; esto para realizar un adecuado uso de los datos personales; asimismo, para evitar posibles vulneraciones al derecho de la autodeterminación informativa de las personas.

En suma, es dable recomendar a la UES armonizar su normativa interna con las disposiciones relativas a la protección de datos personales establecidas en la LAIP, incluyendo en las normas que regula la correspondencia entre los organismos universitarios en el ejercicio de sus competencias, el adecuado tratamiento de los datos personales, es decir, se debe consignar que al remitir notas u otro tipo de documento que contenga datos personales, se establezca: la finalidad específica de los datos que se remiten, las personas con acceso a esa información, la prohibición de su difusión de esa información; así como, las posibles infracciones establecidas en la LAIP en las que se pudiera incurrir de vulnerar dicha normativa.

3. Decisión del caso

Por lo tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con base en los artículos 6 y 18 de la Cn., 52 inciso 3º, 58 letra “e”, 76 letra “b” de las infracciones muy graves, 96 y 102 de la LAIP; 78, 79 y 80 del Reglamento de la LAIP; y, 217 del Código Procesal Civil y Mercantil, a nombre de la República de El Salvador, este Instituto **resuelve:**

a) Declarar que Juan Rosa Quintanilla Quintanilla, Vicerrector Administrativo de la Universidad de El Salvador (UES) no incurrió en la infracción contenida en el artículo 76 de la Ley de Acceso a la Información Pública “LAIP”, consistente en: “entregar o difundir información reservada o confidencial”, contenida en la letra “b” de las infracciones muy graves a la LAIP.

b) Absolver a Juan Rosa Quintanilla Quintanilla, Vicerrector Administrativo de la Universidad de El Salvador (UES) por las razones señaladas en esta resolución.

c) Hacer saber a las partes que en contra de este acto administrativo cabe el recurso de reconsideración; sin embargo, puede directamente acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa si así considera necesario. De presentar el recurso de reconsideración este no suspende el plazo establecido en el artículo 25 literal “a” de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

d) **Publíquese** esta resolución, oportunamente.

e) **Archivar** definitivamente este expediente una vez esta resolución adquiera estado de firmeza.

Notifíquese.

-----A.GREGORI-----ILEGIBLE-----C.L.E-----R.GÓMEZ-----
---PRONUNCIADA POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LA
SUSCRIBEN"RUBRICADAS"